

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE

1852.

SE SUSCRIBE

en Madrid en las oficinas de EL DIARIO ESPAÑOL,
calle de Capellanes, núm. 10.
EN LAS LIBRERÍAS
de Monier, Carrera de San Jerónimo; Cuesta,
calle Mayor; Villa, plaza de Santo Domingo; y
Oliveros, calle de la Concepción Gerónima,
núm. 13.

PRECIO DE SUSCRICIÓN.

Un mes. 12 rs.
Tres meses. 36

EL DIARIO ESPAÑOL

CIENTÍFICO Y LITERARIO.



SÁBADO 4 DE DICIEMBRE

1852.

SE SUSCRIBE

en provincias en las principales librerías y admi-
nistraciones de correos, y por medio de libranza,
franca de porte, á la orden del administrador
de EL DIARIO ESPAÑOL.

EN PARÍS:

Librería Española, rue de Provence, núm. 12.
EN LA HABANA:
Sres. Charlin y Fernandez, calle del Obispo.

PRECIO DE SUSCRICIÓN.

PROVINCIALES. Tres meses. 60 rs.
ESTRANGERO. Tres idem. 72
Seis idem. 144
ULTRAMAR. Un mes. 30

Suprimimos la parte de fondo y otros materiales
para dar cabida á los importantes documentos que
publica la *Gaceta* de ayer.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Real decreto.

En uso de la prerrogativa que me compete por el
art. 26 de la Constitución de la monarquía, y confor-
mándose con el parecer de mi Consejo de Ministros,
vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se disuelve el Congreso de los Dipu-
tados.
Art. 2.º Se procederá á nuevas elecciones con
arreglo á la ley electoral vigente.
Art. 3.º Las Cortes del reino se reunirán en la
capital de la monarquía el día 1.º de marzo de 1853.
Dado en palacio á primero de diciembre de mil
ochocientos cincuenta y dos.—Está rubricado de la
real mano.—El presidente del Consejo de Ministros,
Juan Bravo Murillo.

Exposición á S. M.

Señora: Obtenida la vena y autorización de V. M.,
el gobierno estaba dispuesto á presentar á las Cortes
y leer en el día de hoy al Congreso de los dipu-
tados los importantes proyectos de ley; uno de los
presupuestos generales del Estado para el año pró-
ximo de 1853, otro de reforma de la Constitución
de la monarquía, y de varias leyes que forman el
sistema de la organización política.

Verificada ayer la votación de la mesa del Con-
greso de los diputados, no favorable al ministerio,
bien que de carácter reservado; y habiéndose pre-
sentado una proposición, apenas constituido el Con-
greso, que el gobierno de V. M. se abstiene de cali-
ficar, prejuzgando en sentido contrario al proyecto
de reforma, y hostil al gobierno, el contenido de
dicho proyecto, antes de ser conocido: el ministerio
creyó oportuno elevar estos graves sucesos á la
consideración de V. M. para que se dignase deci-
dir, en su voluntad soberana, si los actuales minis-
tros debían dimitir las funciones que V. M. les
ha honrado hasta ahora.

V. M. con libérrima y amplia voluntad, á mi-
smo tiempo que se dignó manifestar de la manera
mas terminante que el ministerio disfruta de la om-
nípota confianza de V. M., tuvo á bien resolver la
disolución del Congreso de los diputados, que se ha
verificado en este día. Y no habiendo sido posible
por este motivo presentar á las Cortes el mencio-
nado proyecto de reforma, y como sea el propósito de
V. M. que se someta á la deliberación de las pró-
ximas, el Consejo de Ministros tiene la honra de
proponer á V. M. que se publique, á fin de que lle-
gando á noticia de todos, tenga el país una idea
exacta de él, y se ilustre la conciencia de los sena-
dores y diputados, á cuya deliberación haya de so-
meterse. De este modo, señora, podrá apreciarse
con exactitud la intensidad del beneficio que el ma-
terial corazón de V. M. desea dispensar á los espa-
ñoles.

Dígnese por tanto V. M. conceder su real apro-
bación al adjunto proyecto de decreto, que de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo la honra
de someter á V. M.

Madrid 2 de diciembre de 1852.—Señora.—A
L. R. P. de V. M.—Juan Bravo Murillo.

Real decreto.

Conformándose con lo propuesto por el presidente
de mi Consejo de Ministros, de acuerdo con el pa-
recer del mismo Consejo, vengo en mandar que se
publiquen los proyectos de Constitución, de organiza-
ción del Senado, de elecciones de diputados á Cor-
tes, de régimen de los cuerpos colegisladores, de re-
laciones entre los dos cuerpos colegisladores, de se-
guridad de las personas, de seguridad de la propie-
dad, de orden público, y de grandezas y títulos del
reino, así como el proyecto de reforma de la Consti-
tución de la monarquía, y de varias leyes que forman
el sistema de la organización política.

Dado en palacio á dos de diciembre de mil ochocien-
tos cincuenta y dos.—Está rubricado de la real
mano.—El presidente del Consejo de Ministros, Juan
Bravo Murillo.

Á LAS CORTES.

Para que las Constituciones políticas de una na-
ción tengan la estabilidad y firmeza que tanto im-
portan al buen régimen y concierto de los Estados, es
necesario que solo comprendan aquellos principios
que se refieren exclusivamente á la organización
del poder público; y aun así, fundadas como se ha-
llan por su esencia las instituciones de esta natu-
raleza en la conveniencia general, han de ser de
suyo tan variables como la conveniencia misma que
las inspira. Los móviles de tales variaciones son la
experiencia y el tiempo. La primera avisa de las
faltas cometidas en los anteriores ensayos: este re-
vela nuevas necesidades sociales, y obliga, por con-
siguiente, á la indagación de nuevos medios para
satisfacerlas. Así, á la Constitución de 1812 succe-
dió la de 1837, y á esta la de 1845, adoptándose
en cada una de ellas las reformas que al parecer
exigían la experiencia y las necesidades de la res-
pectiva época.

En los siete años transcurridos desde la última re-
forma, ha demostrado la experiencia que las actua-
les instituciones políticas no satisfacen las necesi-
dades del país: así lo siente el país mismo, que,
gracias á los beneficios de la paz que la Providen-
cia nos ha dispensado, á la habitual senectez de
sus habitantes, y á los constantes esfuerzos del trono,
ha podido ver estable el orden público, propaga-
rse la aplicación al trabajo, y dirigirse las miras
hacia el fomento de la riqueza pública y privada.

El gobierno, para el cual es un deber impres-
cindible y sagrado buscar remedio á los males que
aquejan al país, precaviera y remover los obstá-
culos que puedan oponerse á la mejora de la con-
dición moral y material de sus habitantes, ha te-
nido la honra de proponer á S. M., en las institu-
ciones políticas del reino, reformas, graves ciertamente,
pero que, si bien dejarán mas libre y espedita
la acción gubernamental, fortaleciendo la
autoridad real en beneficio de los pueblos, no
afectan á la esencia del régimen representativo
constitucional, por cuanto quedará al país la inter-
vención debida en la formación de las leyes.

Persuadido el ánimo de S. M. de la necesidad de
estas reformas, se ha dignado facultar competen-
temente á sus ministros para que pidan á las Cor-

tes autorización á fin de plantear como leyes del
Estado los proyectos siguientes:

- 1.º De Constitución.
- 2.º De organización del Senado.
- 3.º De elecciones de diputados á Cortes.
- 4.º De régimen de los cuerpos colegisladores.
- 5.º De relaciones entre los dos cuerpos colegisladores.
- 6.º De seguridad de las personas.
- 7.º De seguridad de la propiedad.
- 8.º De orden público.
- 9.º De grandezas y títulos del reino.

Estos nueve proyectos, que comprenden una ley
fundamental y ocho orgánicas, cuyo conjunto ha de
componer lo mas esencial de las instituciones políti-
cas del reino, forman un todo cuyas partes se ha-
llan de tal modo enlazadas entre sí, que no podrá
acaso alterarse una de ellas sin desconcertar todo
el sistema. Esta razón, unida á la de evitar dilacio-
nes, ha movido al gobierno para pedir que se le au-
torice á plantearlo íntegro y sin modificación al-
guna.

El proyecto de Constitución solo abraza las dis-
posiciones de carácter mas fundamental y estable, de-
jando á las leyes orgánicas u otras especiales fijar
la debida garantía de los derechos políticos y priva-
dos. Así podrán introducirse en estas las alteracio-
nes que las circunstancias de los tiempos requieran,
sin tocar á la Constitución del Estado.

Combinar las funciones de los poderes públicos de
manera que, lejos de ser rivales, como se concibe
en épocas de transición, se dirijan unidas al mismo
fin, segun es propio en épocas tranquilas y que tien-
den á un estado definitivamente normal; extinguir
el influjo de las pasiones en la discusión de las le-
yes, procurando que esta sea mesurada y cuerda,
cual conviene á los altos objetos á que se destina;
remover los obstáculos que, sin ventaja para el Es-
tado, ofrece al gobierno la discusión anual y com-
pleta de los presupuestos; impedir que quede para-
lizada la acción del gobierno cuando las circuns-
tancias reclamases disposiciones legislativas y las Cor-
tes no se hallasen reunidas; exigir garantías sólidas
de acierto para el desempeño del elevado ministerio
de la senaduría y de la diputación, reuniendo en la
alta cámara todos los elementos conservadores exis-
tentes; tales son los objetos primordiales que se pro-
pone el gobierno en los proyectos sometidos á la de-
liberación de las Cortes.

Así, se establecen las discusiones á puerta cerra-
da, con lo cual, apartados los estímulos de la van-
gloia, inseparables de la publicidad, se ahorrará
mucho tiempo en la formación de las leyes, y estas
ganarán en perfección.

Únicamente serán objeto de la discusión de las
Cortes respecto de los presupuestos las alteraciones
que en ellos se introduzcan cada año, cuando hayan
sido ya definitivamente aprobados.

Se reserva al trono la facultad de anticipar las
disposiciones legislativas que la necesidad exija,
cuando las Cortes no se hallen reunidas, pero oyen-
do previamente á los respectivos cuerpos de la alta
administración del Estado, y dando cuenta á las
Cortes en la inmediata legislatura para su examen
y resolución. De esta manera queda espedita en to-
das ocasiones la acción del gobierno para la direc-
ción de los negocios públicos, sin incurrir en estra-
limitaciones de poder, y se evitan los abusos que de
semejante facultad pudieran originarse.

Se establecen tres clases de senadores, á saber:
hereditarios, natos y vitales, concertando así el
influjo que en el alto cuerpo legislativo deben ejer-
cer la primera nobleza, el mérito personal consti-
tuido en posición elevada, y la propiedad, que tanto
interés tiene en la acertada gestión de los negocios
públicos.

Tres mil reales de contribución directa devenga-
da con dos años de antelación; dos mil, siempre
que quinientos provengan de la contribución de in-
muebles, ó bien mil, con tal que proceda de la mis-
ma contribución territorial la totalidad de la cuota,
es la garantía que se exige al que aspire á repre-
sentar en la cámara popular los intereses de su país.

El examen y aprobación de las leyes de elección
de los diputados corresponderá al tribunal supremo
de justicia; autoridad independiente, elevada y lle-
nada de garantías de acierto; la que superior á las pa-
siones que suelen agitarse en tales momentos, sabrá
comprender y hacer que se cumpla fielmente la ver-
dadera voluntad de los electores.

Estas son las mas esenciales reformas que con-
tienen los adjuntos proyectos de ley. Ellas son el
fruto de la experiencia de los ministros que, de ór-
den de S. M., tienen la honra de someterlas á la
aprobación de las Cortes, y persuadidos están de
que estableciéndolas habrán de satisfacerse los de-
seos de la gran mayoría de los españoles, que no
son otros que hacer compatible la institución tradi-
cional del trono, sin amenguar sus prerrogativas,
tan caras á todos los españoles, con los adelantos de
la civilización contemporánea, que exigen en los
gobiernos de los pueblos formas representativas.

¡Plegue á la Providencia que sean tan fecundos los
resultados de estas reformas, como sinceros y lea-
les los deseos del gobierno al proponerlas!

Fundados en estas consideraciones, y autorizados
competentemente por S. M., los ministros que sus-
criben tienen la honra de someter á la deliberación
de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY.

Artículo único. Se aprueban los adjuntos pro-
yectos de ley sobre Constitución: organización del
Senado: elecciones de diputados á Cortes: régimen
de los cuerpos colegisladores: relaciones entre los
dos cuerpos colegisladores: seguridad de las perso-
nas: seguridad de la propiedad: orden público, y
grandezas y títulos del reino: los cuales publicará
el gobierno como leyes del Estado.

Madrid 1.º de diciembre de 1852.—El presi-
dente del Consejo de Ministros, ministro de Hacienda,
Juan Bravo Murillo.—El ministro de Estado é
interino de Fomento, Manuel Bertran de Lis.—El
ministro de Gracia y Justicia, Ventura González
Romero.—El ministro de la Guerra, Cayetano Ur-
bina.—El ministro de Marina, Joaquín Ezpeleta.—
El ministro de la Gobernación, Cristóbal Bordin.

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN.

TÍTULO I.

De la Religión.

Artículo 1.º La religión de la nación española es
exclusivamente la católica, apostólica romana.
Art. 2.º Las relaciones entre la Iglesia y el Es-
tado se fijarán por la corona y el Sumo Pontífice en
virtud de concordatos que tendrán carácter y fuerza
de ley.

TÍTULO II.

De las Leyes.

Art. 3.º El Rey ejerce con las Cortes la potestad
de hacer las leyes.

Art. 4.º La iniciativa de las leyes pertenece al
Rey y á cada uno de los cuerpos colegisladores.

Art. 5.º No podrán imponerse ni cobrarse con-
tribuciones ni arbitrios alguno que no estén autorizados
por una ley.

Art. 6.º El presupuesto general de ingresos y
gastos del Estado es permanente: no se podrá hacer
en ellos reforma ó alteración que no esté autorizada
por una ley.

Art. 7.º Se presentarán al examen y aproba-
ción de las Cortes las cuentas de la recaudación é in-
versión de los caudales públicos.

Art. 8.º Se necesita la autorización de una ley
para disponer de las propiedades del Estado, y para
tomar caudales á préstamo sobre el crédito nacional.

Art. 9.º La dotación del Rey y de su familia se
fijará por una ley al principio de cada reinado.

TÍTULO III.

De las Cortes.

Art. 9.º Las Cortes se componen de dos cuerpos
colegisladores iguales en facultades: el Senado y el
Congreso de los diputados.

Art. 10.º El Senado se compone de senadores he-
reditarios, senadores natos y senadores vitales: su
nombramiento pertenece al Rey.

Art. 11.º Una ley especial determinará las cate-
gorías y las condiciones necesarias para ser nombrado
senador, y la forma y circunstancias relativas á estos
nombramientos.

Art. 12.º Los hijos del Rey y del inmediato he-
redero de la corona son senadores natos á la edad de
25 años.

Art. 13.º Además de las funciones legislativas, cor-
responde al Senado:
Primero. Juzgar á los ministros cuando fueren
acusados por el Congreso de los diputados.

Segundo. Conocer de los delitos graves contra la
persona ó dignidad del Rey, ó contra la seguridad del
Estado, conforme á lo que establezcan las leyes, cuan-
do el gobierno los se meta al juicio de este cuerpo.

Tercero. Juzgar á los individuos de su seno en
los casos y en la forma que determinaren las leyes.

Art. 14.º El Congreso de los diputados se compo-
nará de los que fueren elegidos por las juntas electo-
rales, en la forma que determine la ley, la cual fijará
también las condiciones y circunstancias relativas á la
elección y al cargo de diputado.

Art. 15.º No podrá estar reunido uno de los cuer-
pos colegisladores si no que tambien lo esté el otro: ex-
ceptuase el caso en que el Senado ejerza funciones
judiciales.

Art. 16.º Además de la potestad legislativa que
ejercen las Cortes con el Rey, les corresponden las
facultades siguientes:

Primera. Recibir al Rey, al sucesor inmediato á
la corona y á la regencia ó regente del reino, el jura-
mento de guardar la Constitución y las leyes.

Segunda. Elegir regente ó regencia del reino, y
nombrar tutor del Rey menor cuando la Constitución
lo determina.

Tercera. Hacer efectiva la responsabilidad de los
ministros, correspondiendo la acusación al Congreso y
el juicio al Senado.

Art. 17.º Los senadores y los diputados son in-
violables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su
cargo.

Art. 18.º Los senadores y los diputados no podrán
ser procesados ni arrestados durante las sesiones, sin
permiso del cuerpo respectivo, á no ser hallados en
francamente delictivos; pero en este caso y en el de ser pro-
cesados y arrestados cuando estuvieren cerradas las
Cortes, se dará cuenta, lo mas pronto posible, al Sena-
do ó al Congreso respectivamente para su conoci-
miento y resolución.

TÍTULO IV.

Del Rey.

Art. 19.º La persona del Rey es sagrada é in-
violable, y no está sujeta á responsabilidad. Son res-
ponsables sus ministros.

Art. 20.º La potestad de hacer ejecutar las leyes
reside en el Rey; su autoridad se extiende á todo lo
que forma la gobernación del Estado en lo interior y
en lo exterior, para lo cual ejercerá todas las atribu-
ciones y expedirá los decretos, órdenes ó instruccio-
nes oportunas.

En casos urgentes, el Rey podrá anticipar dispo-
siciones legislativas, oyendo previamente á los respec-
tivos cuerpos de la alta administración del Estado, y
dando en la legislatura inmediata cuenta á las Cortes
para su examen y resolución.

Art. 21.º Todo lo que el Rey mandare ó dispusiere
en el ejercicio de su autoridad deberá ser firmado por
el ministro á quien corresponda.

Art. 22.º Corresponde al Rey convocar las Cortes,
suspender y cerrar sus sesiones, y disolver el Con-
greso de los diputados: en este último caso deberá
convocar y reunir otras Cortes en el término de seis
meses.

Las Cortes deben reunirse todos los años.

Art. 23.º Las Cortes serán precisamente convoca-
das luego que vacare la corona, ó cuando el Rey se
imposibilitase de cualquier modo para el gobierno.

Art. 24.º El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 25.º La justicia se administra en nombre del
Rey por los tribunales y jueces, cuyos cargos no po-
drán perderse sino en la forma y por los motivos que
determinen las leyes orgánicas y especiales de la ma-
teria.

Art. 26.º Corresponde tambien al Rey:

Primero. Conceder amnistías.

Segundo. Indultar á los delincuentes con arreglo
á las leyes.

Tercero. Declarar la guerra y hacer y ratificar la
paz, dando después cuenta documentada á las Cortes.

Cuarto. Cuidar de la fabricación de la moneda, en
la que se pondrá su busto y nombre.

Quinto. Nombrar todos los empleados públicos, y
conceder honores y distinciones de todas clases.

Sexto. Nombrar y separar libremente á sus mi-
nistros.

Art. 27.º El Rey necesita estar autorizado por
una ley:

Primero. Para enagenar, ceder ó permutar cual-
quier parte del territorio español.

Segundo. Para ratificar los tratados de alianza
ofensiva, los especiales de comercio, y aquellos en

que se estipule dar subsidios á una potencia es-
trajera.

Tercero. Para abdicar la corona.

Art. 28.º El Rey, antes de contraer matrimonio,
lo pondrá en conocimiento de las Cortes, á cuya apro-
bación se someterán las estipulaciones y contratos
matrimoniales que deban ser objeto de una ley.

Lo mismo tendrá lugar respecto al matrimonio del
inmediato sucesor á una corona.

Ni el Rey ni el inmediato sucesor pueden contraer
matrimonio con persona que por la ley esté escluida
de la sucesión á la corona.

TÍTULO V.

De la sucesión á la Corona.

Art. 29.º La sucesión en el trono de las Españas
será segun el orden de primogenitura y representa-
ción, prefiiriéndose siempre la línea anterior á las
posteriores: en la misma línea el grado mas pró-
ximo al mas remoto; en el mismo grado el varón á
la hembra, y en el mismo sexo la persona de mas
edad á la de menos.

Art. 30.º Estinguidas las líneas de los descen-
dientes legítimos de doña Isabel II de Borbon, Reina
legítima de las Españas, sucederán, per el orden
que queda establecido, su hermana y sus tíos, her-
manos de su padre, así varones como hembras, y sus
legítimos descendientes, si no estuvieren escluidos.

Art. 31.º Si llegaren á estinguirse todas las líneas
que se señalan, se harán por una ley nuevos llama-
mientos.

Art. 32.º Cualquiera duda de hecho ó de derecho
que ocurra en orden á la sucesión á la corona, se re-
solverá por una ley.

Art. 33.º Las personas que sean incapaces para
gobernar, ó hayan hecho cosa por que merezcan per-
der el derecho á la corona, serán escluidas de la su-
cesión por una ley.

Art. 34.º Cuando reinare hembra, su marido no
tendrá parte en el gobierno del reino.

TÍTULO VI.

De la Regencia y Tutoría.

Art. 35.º El Rey es menor de edad hasta cum-
plir 14 años.

Art. 36.º Cuando el Rey fuere menor de edad,
el padre ó la madre de este, y en su defecto el pa-
riente mas próximo á suceder á la corona segun el
orden establecido en la Constitución, entrará desde
luego á ejercer la regencia, y la ejercerá todo el
tiempo de la menor edad del Rey.

Art. 37.º Para que el pariente mas próximo ejerza
la regencia, necesita ser español, tener 20 años cum-
plidos, y no estar escluido de la sucesión á la corona.
El padre ó la madre del Rey solo podrán ejercer la
regencia permeneciendo viudos.

Art. 38.º El regente prestará ante las Cortes el ju-
ramento de ser fiel al Rey menor y de guardar la
Constitución y las leyes.

Si las Cortes no estuvieren reunidas, el regente la
convocará inmediatamente, y entretanto prestará el
mismo juramento ante el Consejo de Ministros, pro-
metiendo reiterarlo ante las Cortes tan luego como se
hallen congregadas.

Art. 39.º Si no hubiere sobre quien recaiga de de-
recho la regencia, la constituirán las Cortes, y se
compondrá de una, tres ó cinco personas.

Hasta que se haga este nombramiento, gobernará
provisoriamente el reino el Consejo de Ministros.

Art. 40.º Cuando el rey se imposibilitare para
ejercer su autoridad, y la imposibilidad fuere reco-
nocida por las Cortes, ejercerá la regencia, durante
el impedimento, el hijo primogénito del Rey, siendo
mayor de 14 años; en su defecto el consorte del Rey,
y á falta de este los llamados á la regencia.

Art. 41.º El regente y la regencia en su caso, ejer-
cerán toda la autoridad del Rey, en cuyo nombre se
publicarán los actos del gobierno.

Art. 42.º Será tutor del Rey menor la persona que
en su testamento hubiere nombrado el Rey difunto,
siempre que sea español de nacimiento: si no lo hu-
biere nombrado, será tutor el padre ó la madre mien-
tras permanezcan viudos; en su defecto lo nombrarán
las Cortes.

No podrán estar unidos los encargos de regente y
tutor sino en el padre ó la madre del Rey.

ARTÍCULO ADICIONAL.

Las provincias de Ultramar, comprendiéndose en
ellas las islas Canarias, serán regidas por disposicio-
nes especiales.

Madrid 1.º de diciembre de 1852.—El presidente
del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo.

PROYECTO DE LEY

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL SENADO.

Artículo 1.º La clase de senadores hereditarios
se compondrá de los grandes de España que reúnan
las siguientes cualidades:

Primera. Ser grande de España por derecho
propio.

Segunda. Ser español de nacimiento ó hijo de pa-
dres españoles.

Tercera. Haber cumplido 25 años de edad.

Cuarta. Pagar 30,000 rs., por lo menos, de con-
tribuciones procedentes de bienes raíces propios vin-
culados.

Art. 2.º El Rey podrá conceder la dignidad de
senador hereditario á los títulos del reino que paguen
la contribución requerida para los grandes de España
en el artículo anterior.

Art. 3.º La contribución se justificará con los do-
cumentos relativos al repartimento y pago, espedi-
dos por las oficinas provinciales de Hacienda pública
y visados por el gobernador de la provincia, que será
el inmediatamente responsable de la exactitud del do-
cumento.

Art. 4.º Serán senadores natos:

Primero. El príncipe de Asturias luego que cum-
pla 14 años de edad.

Segundo. Los infantes de España

y los que, teniendo, no disfruten un sueldo de 30,000 rs. al menos.

Quinto. Los funcionarios o empleados en las provincias de Ultramar.

Art. 5.º No podrá ser elegido diputado en ningún distrito de la respectiva provincia el que sea autoridad, funcionario o empleado cuya jurisdicción, funciones, cargo o empleo se extiendan á toda la comprensión de la misma provincia.

Art. 6.º No podrá ser elegido diputado en el distrito respectivo el que sea autoridad, funcionario o empleado cuya jurisdicción, funciones, cargo u empleo comprenda el todo ó parte del territorio de esta demarcación.

Art. 7.º La incapacidad que establecen los dos artículos precedentes se entiende con todos los que ejerzan empleo, autoridad ó funciones públicas, ya procedan de real nombramiento, ya de elección popular, ya de un carácter mixto.

Art. 8.º La incapacidad establecida en los artículos 5.º y 6.º subsiste hasta los seis meses después de haber cesado el interesado en su respectivo empleo, funciones ó cargo.

Art. 9.º No podrán ser diputados, cualesquiera que sean sus cualidades y circunstancias:

Primero. Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiere recaído contra ellos auto de prisión.

Segundo. Los que por sentencia judicial estén cumpliendo condena que los inhabilite de hecho ó de derecho.

Tercero. Los que se hallen bajo interdicción judicial por incapacidad física ó moral.

Cuarto. Los que estuvieren fallidos ó en suspensión de pagos, ó con sus bienes intervenidos.

Quinto. Los que estuvieren apremiados como deudores á los caudales públicos en concepto de segundos contribuyentes.

Art. 10.º Si un mismo individuo fuere elegido diputado en dos ó más distritos á la vez, optará por uno de ellos en el término de ocho días, contados desde la fecha en que hubiere sido aprobada la última de sus actas respectivas.

Art. 11.º En el caso de que esta opción no se verificase, decidirá la suerte sobre el distrito por el cual se entiende que opta el diputado.

Art. 12.º Cuando un funcionario público de los mencionados en el art. 4.º fuere elegido diputado, optará entre uno y otro cargo en el término de tres días, contados desde la fecha en que tome asiento en el Congreso, ó si no toma asiento, en el término de un mes contado desde el día en que se abran las Cortes.

Si no optare, se entiende que renuncia la diputación.

Art. 13.º El cargo de diputado es gratuito y voluntario: podrá renunciarse antes y después de haber tomado asiento en el Congreso.

La renuncia se dirigirá al presidente, si estuvieren abiertas las Cortes, y en caso contrario al gobierno, á quien toca siempre disponer lo conveniente para que se proceja á su reemplazo con sujeción á la ley.

Art. 14.º Los diputados que durante su encargo reciban del gobierno honores, condecoraciones, empleo ó comisión con sueldo, aunque no fueren de superior categoría ni ofrezcan ventajas al interesado, y aunque sean de rigurosa escala, quedarán desde luego sujetos á reelección.

Art. 15.º Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende á los diputados que fueren nombrados ministros de la Corona.

Art. 16.º Cada diputación á Cortes será elegida para cinco años, salvo el caso de disolución: los diputados podrán ser reelegidos indefinidamente.

TÍTULO II.

Del examen de las actas electorales y de las calidades de los diputados.

Art. 17.º El examen y aprobación de las actas electorales y de las calidades de los diputados electos, se hará por el tribunal supremo de justicia.

Art. 18.º A este fin el gobierno, por conducto del ministerio de la Gobernación, remitirá al presidente del tribunal una copia autorizada del acta.

Art. 19.º El tribunal se limitará á examinar la legalidad de la elección, atendiendo únicamente á lo que el acta arroja de sí y al tenor estricto de la ley.

Art. 20.º Si el tribunal, para justificar algún hecho protestado ó denunciado en el acta, hubiere menester algún documento, lo pedirá al gobierno, que á su vez lo reclamará de quien corresponda.

Art. 21.º En ningún caso ni para objeto alguno se admitirá la justificación por informaciones de testigos.

Art. 22.º El diputado electo entregará al gobernador de la provincia los documentos que acrediten su aptitud legal: estos se remitirán por el gobernador al gobierno, y por este al tribunal supremo de justicia.

Art. 23.º Si en el término de un mes, contado desde la fecha en que se hubiere remitido el acta al tribunal, no presentare el diputado electo los documentos de que habla el artículo anterior, se entenderá que renuncia este cargo, y se procederá á nueva elección.

Art. 24.º El gobernador admitirá cualquier reclamación que contra la aptitud ó los documentos se hiciera, y la remitirá juntamente con ellos al gobierno, para el efecto del artículo precedente.

Art. 25.º El diputado electo será oído por el tribunal en el caso del examen de sus calidades y acta respectiva, si lo solicitare antes de que recaiga la decisión.

Art. 26.º El tribunal fallará de plano, y de sus decisiones no podrá haber ulterior recurso.

Art. 27.º Se llevará una acta de las sesiones del tribunal. En ella constará:

Primero. Un extracto del acta electoral.

Segundo. Un resumen de las razones en que la mayoría del tribunal funde su decisión.

Tercero. Esta decisión ó fallo.

Copia de esta acta se remitirá al gobierno, que cuidará de su publicación en la Gaceta oficial.

Art. 28.º El tribunal expedirá á favor del diputado electo un certificado que firmarán el presidente y dos de los ministros que hubieren tomado parte en la decisión, y en el constará: 1.º El número de electores que concurrieron á la elección en el distrito respectivo. 2.º El de los votos que el diputado obtuvo. 3.º Los requisitos legales de este. Y 4.º La declaración de diputado por el tribunal.

Este certificado servirá al interesado de credencial para presentarse en el Congreso.

El gobierno remitirá al presidente del Congreso un estado general de las actas aprobadas, de las no aprobadas, y de los diputados electos.

Art. 29.º Cuando una acta fuere declarada nula, ó el diputado electo no tuviere la aptitud legal, dispondrá el gobierno que se proceda á nueva elección, verificada la cual se arreglará el examen de esta nueva acta y de las calidades á lo que se halla dispuesto en el presente título.

Art. 30.º Ningún diputado podrá tomar asiento en el Congreso interin su acta no sea aprobada y reconocida su aptitud legal.

Art. 31.º Cuando se verifique una elección general, cuidará el gobierno de señalar los plazos en términos de que haya el tiempo prudencialmente bastante para que las operaciones del tribunal se verifiquen, á lo menos por lo tocante al mayor número de las actas y de los diputados electos, antes de la apertura de las Cortes. Este plazo no será nunca menor de un mes.

TÍTULO III.

De los electores.

Art. 32.º Los electores del distrito forman la junta que ha de elegir al respectivo diputado.

Art. 33.º Para ser elector se necesita:

Primero. Haber cumplido 25 años de edad.

Segundo. Ser español y estar vecinado en alguno de los pueblos del distrito desde dos años antes, á lo menos, del día en que empiece á formarse la lista electoral.

Tercero. Ser uno de los 150 mayores contribuyentes por contribuciones generales directas, ó pagar

la cuota mínima que se necesita para completar aquel número.

Para determinar la cuota de contribución se acumulará la que se pague por el mismo concepto en los demás distritos y pueblos del reino.

En las provincias en donde por cualquiera causa no se paguen contribuciones directas al formarse las listas electorales, se inscribirán en ellas los 150 domiciliados más pudientes.

Art. 34.º No pueden ser inscritos en las listas de electores, aunque reúnan las cualidades necesarias, los comprendidos en el art. 9.º de esta ley.

TÍTULO IV.

De las listas electorales.

Art. 35.º El gobernador de la provincia formará las listas electorales de cada distrito.

Art. 36.º En los quince primeros días de diciembre publicará el gobernador en el Boletín oficial la lista primitiva de los que, con arreglo á la lista anual que en los Boletines oficiales de provincia ha de publicarse, resulten ser los 150 mayores contribuyentes.

Art. 37.º Hasta el 15 de enero inmediato recibirá las reclamaciones documentadas que se le dirijan sobre inclusión ó exclusión, y en los restantes hasta el 31 del propio mes decidirá oyendo al consejo provincial, estas reclamaciones. Toda resolución de esta especie se insertará en el Boletín oficial.

Art. 38.º En los diez primeros días de febrero, los que se sientan agraviados podrán recurrir á la audiencia, la cual, en los días siguientes hasta 1.º de marzo, con vista del mismo expediente que haya motivado la resolución del gobernador de la provincia, y con preferencia á cualquiera otro negocio, fallará definitivamente, comunicando sus decisiones al gobernador.

Art. 39.º Últimas las listas por este medio, el gobernador las publicará como definitivas, antes del 1.º de abril inmediato.

Art. 40.º De estas listas se archivarán en dos ejemplares en el gobierno de la provincia, dos en la audiencia del territorio y dos en el ministerio de la Gobernación. Todos estos ejemplares irán autorizados con la firma del gobernador y de dos consejeros provinciales.

Art. 41.º El gobernador cuidará de que las listas se impriman y publiquen, facilitando su adquisición, para lo cual hará que se expendan á un precio módico.

Art. 42.º Solo tendrán derecho á votar las personas que se hallen inscritas en las respectivas listas electorales. Ningún elector podrá estar inscrito al mismo tiempo en las listas electorales de más de un distrito.

Art. 43.º Toda elección de diputados á Cortes se hará con arreglo á las listas que se hallen últimas al tiempo de empezar la elección, cualquiera que sea la época en que se celebre.

Art. 44.º Las listas electorales son permanentes. Se reemplazarán cada dos años.

Art. 45.º En cada rectificación el gobernador, al publicar la lista primitiva, hará en la existente última las siguientes modificaciones:

Primera. Exclusión de los que hubiesen fallecido, de los que hubiesen mudado de domicilio, y de los que, con arreglo á las listas de contribuyentes insertas en los Boletines, hubieren perdido el derecho electoral.

Segunda. Inclusión de los que, con arreglo á las listas de contribuyentes, hubieren adquirido el derecho electoral.

Art. 46.º Los trámites y plazos que señala esta ley para la formación de las listas no podrán ser alterados, fuera de los casos en que algún motivo grave ó imprevisto exija una variación, que se hará por el gobierno oyendo al Consejo Real en pleno.

En las primeras listas que se hagan, el gobierno designará los días y plazos en que hayan de verificarse las diferentes operaciones y actos que en este título se prescriben.

TÍTULO V.

Del modo de hacer las elecciones.

Art. 47.º El gobierno dividirá las provincias en distritos electorales y señalará la cabeza del distrito.

Art. 48.º La elección se hará en el pueblo cabeza de distrito y en un solo local.

Art. 49.º Presidirá la junta electoral el juez del partido de la cabeza del distrito electoral: si hubiere mas de uno, el mas antiguo en el distrito. En caso de duda, resolverá el gobernador. A falta de jueces, presidirá la junta la persona que el gobernador designe.

Art. 50.º Serán secretarios escrutadores los cuatro de menor edad entre los presentes al instalarse la junta electoral. Cualquiera duda sobre este punto será resuelta por el presidente sin ulterior recurso.

Art. 51.º La votación será secreta, y se hará del modo siguiente:

El presidente entregará al elector, después de cerciorarse de que se halla inscrito en la lista electoral, una papeleta rubricada por el mismo presidente.

El elector escribirá ó hará escribir en el mismo local, el nombre de la persona por quien vote.

Cuando una papeleta contenga mas de un nombre, se entenderá que el voto recae únicamente sobre el primero, anulándose los restantes.

Art. 52.º La votación durará por lo menos ocho horas, á no ser que antes hayan votado todos los electores del distrito. Si al terminar las ocho horas aun hubi se electores presentes sin votar, el acto se prolongará, con la interrupción de una hora de descanso, por el tiempo necesario hasta que lo verifiquen todos los que dentro de aquel término se hubiesen presentado.

Art. 53.º Terminada la votación, se verificará el escrutinio del modo siguiente:

El presidente sacará de la urna electoral una á una las papeletas: uno de los secretarios las leerá en voz alta, y acto continuo las pasará á los otros tres. A cualquier elector presente le será lícito examinar por sí las papeletas.

Leídas que fueren estas por el presidente y los cuatro secretarios, cada uno de estos escribirá en una lista el nombre del candidato.

Terminado el escrutinio, el presidente proclamará diputado electo al que resulte con mayor número de votos.

Las papeletas, reunidas en el acto por el presidente, se cerrarán en un pliego, que será sellado con un sello especial, y autorizado con el nombre y rubrica del presidente y los cuatro secretarios. Este pliego se remitirá certificado directa é inmediatamente al presidente del tribunal supremo de justicia.

Art. 54.º De todo lo verificado se estenderá una acta, que firmarán el presidente y los escrutadores: en ella constará: 1.º El número de electores del distrito. 2.º El número y los nombres de los electores que hubieren tomado parte en la votación. 3.º Las dudas, reclamaciones ó protestas que se hubieren presentado, y la opinión de la mesa acerca de estas mismas dudas, reclamaciones ó protestas.

Art. 55.º Al día siguiente de la elección se fijará á la puerta del local de la junta un estado en que conste: 1.º El número de electores del distrito. 2.º El número y los nombres de los votantes. 3.º Los candidatos que hayan obtenido votos. Y 4.º El nombre del diputado electo.

Art. 56.º El acta original de la junta se depositará en el archivo del ayuntamiento de la cabeza del distrito: de ella se sacarán cuatro copias autorizadas por el presidente y los escrutadores; una se depositará en el archivo del gobierno de provincia; otra se entregará al diputado electo, y las dos restantes se remitirán al gobierno, el cual pasará una de ellas al tribunal supremo de justicia para su examen y aprobación.

Art. 57.º El gobernador de la provincia publicará íntegra el acta de cada distrito en el Boletín oficial. Publicará además, en lista especial, los nombres de los electores que no hubieren concurrido á votar.

Art. 58.º En las juntas electorales solo puede tratarse de elecciones. Todo lo demás que en ellas se haga será nulo, sin perjuicio de lo procedente judicialmente.

mente contra quien haya lugar en razón de cualquier exceso que se cometiere.

Art. 59.º Solos electores, las autoridades civiles y los auxiliares que el presidente estime necesarios tendrán entrada en las juntas electorales. Ningún elector, cualquiera que sea su clase, podrá presentarse en ellas con armas, palo ó bastón.

Las autoridades podrán usar en dichas juntas el bastón y demás insignias de su ministerio.

Art. 60.º Al presidente de las juntas electorales toca en ellas la conservación del orden.

TÍTULO VI.

De la sanción penal.

Art. 61.º El funcionario público que desentendiéndose de los datos oficiales que por esta ley se han de tener presentes para la formación ó rectificación de las listas electorales para diputados á Cortes, ó desestimando alguna reclamación oportuna y legal acordada indebidamente la inclusión ó la exclusión de alguna persona de aquellas listas, será castigado con arreglo á lo dispuesto en el art. 199 del código penal.

Art. 62.º Incurrirán en las penas determinadas por el art. 300 del código penal los funcionarios públicos que, cometieren en la ejecución de esta ley alguno de los abusos siguientes:

Primero. Hacer salir de su domicilio á un elector en los días de las elecciones, ó impedir con alguna disposición contraria á las leyes el ejercicio del derecho electoral.

Segundo. Alterar los plazos señalados en esta ley para las respectivas operaciones electorales.

Art. 63.º El funcionario público que, sin justa causa, rehusare dar en el término de 24 horas á quien le reclamase copia certificada de cualquier documento convenientemente útil para probar la capacidad ó incapacidad legal de cualquier elector, será castigado con arreglo al art. 301 del código penal.

Esta disposición es aplicable al funcionario público que, sin causa justificada, rehusare dar certificación de las providencias que dictare para el cumplimiento de esta ley.

Art. 64.º Para los efectos de esta ley se considerarán funcionarios públicos:

Primero. Todos los que están comprendidos en el art. 322 del código penal.

Segundo. Todos los que en cualquiera de los actos electorales desempeñen cargo público accidental, sea en su origen y naturaleza.

Art. 65.º Incurrirán en las penas señaladas en el ya mencionado art. 199 de código penal:

Primero. El elector que maliciosamente votare ó intentare votar en una elección mas de una vez.

Segundo. El que votare ó intentare votar tomando el nombre de otro elector.

Tercero. El que en las elecciones ó en cualquiera de las operaciones ó trámites preliminares cometiere alguna falsedad que no esté especialmente mencionada en los párrafos anteriores, ni constituya delito de los previstos en el código penal.

Art. 66.º El que cometiere á un elector á emitir su voto, ó lo impidiere emitirlo, en cualquier sentido que sea, incurrirá en la pena señalada en el art. 420 del código penal.

Si el que cometiere ó impidiere lo verificase por vías de hecho, incurrirá, según los casos, en las penas determinadas en los artículos 405, 417 y 418 del código penal.

Art. 67.º Además de las penas señaladas en los artículos anteriores, cualesquiera personas culpables de los delitos en los mencionados, incurrirán en la pena de privación de su respectivo voto activo y pasivo.

Art. 68.º El presidente de la junta electoral, siempre que no estuviere necesario proceder judicialmente, podrá hacer salir del local de la junta, ó detener hasta por diez días, ó bien imponer una multa que no excederá de 1000 reales:

Primero. Al que se presente en la junta con armas, palo ó bastón.

Segundo. Al que en la entrada ó dentro del local perturbe el orden ó cometa algún exceso, ó de algún modo imposible el pacífico ejercicio del derecho electoral.

Art. 69.º Cuando el acta de un distrito fuese anulada tres veces consecutivas por ocurrir en el acto de la elección algún tumulto, ó por la repetición de hechos punibles, el tribunal supremo lo pondrá en conocimiento del gobierno, el cual podrá proponer un proyecto de ley privando al mismo distrito del derecho electoral por un tiempo determinado.

Estado á que se refiere el título 1.º de esta ley, y en el que se marca el número de diputados que corresponde á cada provincia.

PROVINCIA.	POBLACION.	NUMERO DE DIPUTADOS.
Alava	67,523	1
Albacete	180,763	3
Alicante	318,444	5
Almería	234,789	3
Avila	137,903	2
Badajoz	316,022	5
Balazares	229,197	3
Barcelona	442,273	6
Burgos	224,407	3
Caceres	231,398	3
Cádiz	324,703	5
Castellón	199,950	3
Ciudad-Real	277,788	4
Córdoba	315,459	5
Coruña	435,670	6
Cuenca	234,582	3
Gerona	214,110	3
Granada	370,974	5
Guadalajara	159,044	2
Guipúzcoa	104,491	1
Huelva	133,470	2
Huesca	214,874	3
Jaen	266,910	4
Leon	267,438	4
Lérida	151,322	2
Lugo	147,718	2
Madrid	357,272	5
Malaga	369,126	5
Murcia	338,442	5
Navarra	224,728	3
Orense	319,038	5
Oviedo	434,635	6
Palencia	148,491	2
Pontevedra	350,002	5
Salamanca	210,314	3
Santander	163,730	2
Segovia	134,854	2
Sevilla	467,303	7
Soria	115,619	2
Tarragona	233,477	3
Teruel	214,983	3
Toledo	276,952	4
Valencia	451,685	6
Valladolid	184,617	3
Vizcaya	114,436	2
Zamora	159,425	2
Zaragoza	304,823	4
Suma	171	

Madrid 1.º de diciembre de 1852.—El presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo.

PROYECTO DE LEY

PARA EL REGIMEN DE LOS CUERPOS COLEGISLADORES.

TÍTULO PRIMERO.

De la constitución y atribuciones de la mesa.

Artículo 1.º En cada uno de los cuerpos colegisladores habrá un presidente, cuatro vice-presidentes y cuatro secretarios.

Art. 2.º El presidente y los vice-presidentes serán nombrados por el Rey, al principio de cada legislatura, de entre los individuos del respectivo cuerpo. Los secretarios serán elegidos respectivamente por el Senado y por el Congreso.

Art. 3.º El presidente lleva la voz y dirige los actos del respectivo cuerpo colegislador: á su autoridad toca la conservación del orden, teniendo á su cargo todo lo concerniente al régimen interior de la corporación.

Art. 4.º En su consecuencia, es obligación del presidente:

Primero. Presidir las comisiones que hayan de nombrarse en representación del cuerpo.

Segundo. Abrir, suspender y cerrar las sesiones; señalar anticipadamente los asuntos que en ellas deban discutirse; conceder ó negar la palabra; cuidar de que las cuestiones no se extravíen; resolver cualquiera duda imprevista que pueda suscitarse respecto al giro de una discusión.

Tercero. Hacer que se mantenga el orden y se guarde el respeto debido á la dignidad del cuerpo; que sus individuos se conduzcan entre sí en los debates con todo comedimiento, y que no se ofenda ni deprimá á persona alguna ausente ó estraña á la corporación.

Cuarto. Formar y someter al cuerpo respectivo el presupuesto especial de gastos é ingresos; proponer las mejoras que estime convenientes; ordenar la aplicación del presupuesto; cuidar de la policía interior, nombrar y separar á los empleados y dependientes.

Art. 5.º A fin de llenar estas obligaciones, queda el presidente facultado:

Primero. Para retirar la palabra á un senador ó diputado, según el caso, siempre que se extravíe de la cuestión después de haber sido advertido tres veces.

Segundo. Para llamar al orden al orador, al que le interrumpe, ó al que de algún modo perturbe la discusión.

Tercero. Para impedir, hasta por quince días, que asista á las sesiones de su respectivo cuerpo el que sea llamado al orden tres veces en una legislatura, ó al que falte al decoro del cuerpo, ó profiera palabras mal sonantes ó ofensivas, siempre que el orador no se preste á dar explicaciones, ó las que diere no fueren satisfactorias.

Cuarto. Para detener hasta por un mes, é imponer una multa que no podrá exceder nunca de 50 duros, al que, no perteneciendo al cuerpo, faltó dentro del mismo edificio á la autoridad del presidente y al respecto que se debe á los senadores ó diputados.

Si el exceso fuere de gravedad, será el infractor entregado al tribunal competente.

Art. 6.º El presidente no tiene voz ni voto en ninguna discusión ó acuerdo del cuerpo; su cargo es voluntario; puede renunciarse en cualquier tiempo.

Art. 7.º Los vice presidentes reemplazan al presidente y ejercen su autoridad en los casos en que hacen sus veces; toman antigüedad según la fecha, ó en igualdad de fechas, según el orden de sus nombramientos.

Art. 8.º Los secretarios son los encargados de redactar el acta de las sesiones, de dar cuenta de las comunicaciones y expedientes que se dirijan al cuerpo colegislador, y de auxiliar al presidente en la forma que este determine, para todo lo que concierne al desempeño de su cargo.

Art. 9.º Los individuos que constituyen la mesa formarán por sí una junta que se denominará Consejo de presidencia, y cuyas funciones serán:

Primera. Emitir previamente su dictamen

como de *conveniencia manifiesta*, y obtuviere el asentimiento de las tres cuartas partes de los presentes y la aceptación del gobierno, se podrá discutir y votar en el acto.

Art. 60. En cualquier estado de una discusión, salvas las excepciones ya mencionadas, podrá pedirse que se declare el punto suficientemente discutido.

Art. 61. Cuando termine una discusión se procederá a votar, haciéndose para ello la oportuna pregunta por uno de los secretarios, con arreglo a las instrucciones del presidente.

Art. 62. La votación podrá ser:
Primero. Ordinaria.
Segundo. Nominal.

En ningún caso se votará secretamente, fuera del de la elección de los secretarios, que podrá hacerse por papeleta, si así lo acordare el respectivo cuerpo.

La votación ordinaria será levantándose o permaneciendo sentados.

La nominal, diciendo cada uno desde su asiento y en alta voz su nombre, y añadiendo si ó no, según que apruebe ó desapruebe.

Art. 63. Para que la votación sea nominal, deben pedirla cuando menos, siete individuos.

Art. 64. En el caso de ocurrir duda en una votación ordinaria, a juicio del presidente ó de algún diputado que así lo manifestare, aun después de publicada la votación por el secretario, se votará el asunto nominalmente.

Art. 65. Para constituir acuerdo ó resolución del cuerpo, basta en todos los casos la mayoría de los votantes. Sin embargo, no puede haber sesión a menos que concurren treinta senadores ó diputados.

Para la votación de las leyes deberán concurrir, por lo menos, la mitad más uno de los que se hubieren presentado en la respectiva legislatura.

Cuando en una votación no resultare número suficiente, se procederá en la sesión inmediata a segunda votación, aprobándose ó desechándose lo que entonces acordase la mayoría de los votantes.

Siempre que ocurra empate se discutirá el asunto nuevamente; y si lo hubiere segunda vez, se considerará desechado el proyecto ó la proposición.

TÍTULO VII.

De las peticiones.

Art. 66. Al principio de cada legislatura se nombrará para el examen de las peticiones una comisión, que se completará siempre que falte una tercera parte de sus individuos.

Art. 67. Toda petición deberá ser presentada al presidente por un individuo del respectivo cuerpo colegislador.

Art. 68. La discusión se verificará como en los casos ordinarios; únicamente podrá adoptarse una de estas dos resoluciones:

Primera. Que se tenga presente en tiempo oportuno.

Segunda. Que pase al gobierno.

En ningún caso podrá recomendarse al gobierno una petición.

TÍTULO VIII.

De la acusación de los ministros.

Art. 69. Toda proposición de acusación se entregará al presidente del Congreso.

Dada lectura de ella, se preguntará si se toma ó no en consideración: en caso afirmativo se apoyará por uno de los firmantes, y contestada por el interesado ó interesados, ó por cualquier individuo del cuerpo, ó por unos y otros, se preguntará si se nombra una comisión.

Art. 70. Si el Congreso acuerda que la comisión no se nombre, se entenderá desechada la proposición, no pudiendo tener ulterior curso en ningún tiempo.

Art. 71. En el caso de que se acuerde el nombramiento, no podrá la comisión evacuar su encargo sin oír previamente a la persona ó personas comprendidas en la acusación.

El dictamen que formule será discutido, como cualquiera otro de comisión, siempre con audiencia de los interesados, si la solicitaren.

Art. 72. Estos podrán usar de la palabra cuando la pidan y sin consumir tiempo.

Tendrán derecho a pedir lectura ó exhibición de cuantos documentos les convinieren.

Podrán asimismo hacer la defensa por escrito, y presentar los documentos que estimaren conducentes a su objeto.

Art. 73. Si la resolución del Congreso, ó en su caso del Senado, fuere favorable al interesado ó interesados, no podrá intentarse nueva acusación por la misma causa en ningún tiempo.

TÍTULO IX.

Disposiciones generales.

Art. 74. El presidente, oyendo al consejo de la presidencia, y con sujeción a esta ley, formará el reglamento interior de su respectivo cuerpo.

Este reglamento se ha de someter a la aprobación real.

Art. 75. Igual aprobación necesitará cualquiera alteración que en adelante se hiciere en el mismo reglamento.

Madrid 1.º de diciembre de 1852.—El presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo.

PROYECTO DE LEY

SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS DOS CUERPOS COLEGIADOS.

Art. 1.º El Rey abre y cierra las Cortes, en persona ó por medio de sus ministros.

La suspensión de las sesiones se verificará por real decreto leído en ambos cuerpos colegisladores por los ministros, ó comunicado a los presidentes.

Art. 2.º Toca al Rey señalar el día, la hora y el local para la reunión de las Cortes, y proveer a todo lo necesario para la celebración de este acto.

Art. 3.º El Senado y el Congreso se reunirán en un solo cuerpo:

Primero. Cuando asista el Rey.

Segundo. Para recibir al Rey el juramento a la Constitución del Estado.

Tercero. Para nombrar regente ó regencia, ó tutor del Rey menor, y para recibir al regente, regencia ó tutor el juramento que la Constitución prescribe.

Art. 4.º Cuando se reúnan los dos cuerpos, será presidente el del Senado, y en su defecto el del Congreso.

Harán de secretarios los de este último cuerpo.

Los senadores y diputados se sentarán indistintamente.

Art. 5.º Las resoluciones de estos cuerpos reunidos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los senadores y diputados presentes.

La votación se hará secretamente y por papeletas, que se leerán en alta voz al tiempo de hacer el escrutinio.

Art. 6.º Cada uno de los cuerpos colegisladores puede suspender en cualquier estado los proyectos de ley que le hayan sido propuestos por individuos de su seno; pero no dejará de discutir y votar los que le hayan sido remitidos por el rey ó por el otro cuerpo colegislador.

Art. 7.º Mientras esté pendiente en uno de los cuerpos colegisladores algún proyecto de ley, no puede hacerse en el otro propuesta alguna sobre el mismo objeto.

Los cuerpos colegisladores se comunicarán recíprocamente y oportunamente la orden del día de cada sesión.

Art. 8.º Todo proyecto de ley presentado por el gobierno, ó remitido por el otro cuerpo colegislador, continuará discutiéndose en el cuerpo donde se halle, ó donde deba pasar, si el gobierno lo reproduce, aun después de la disolución del Congreso.

Art. 9.º Cuando un proyecto de ley aprobado por un cuerpo fuere modificado por el otro, se nombrará una comisión compuesta de cinco individuos de cada uno.

Lo que la mayoría de la comisión mista determinare,

se pondrá a discusión, sin que pueda alterarse en ninguno de ambos cuerpos; y si fuere admitido por los dos, quedará aprobado el proyecto de ley.

Art. 10. La presentación del proyecto aprobado a la sanción del Rey corresponde al último que lo hubiere discutido, el cual lo verificará por medio de una comisión.

Art. 11. Cuando el Congreso declare que há lugar a juzgar a los ministros, nombrará los diputados que han de sostener la acusación ante el Senado.

Art. 12. Los dos cuerpos se entenderán entre sí por medio de sus presidentes y por mensajes firmados por el presidente y dos secretarios.

Art. 13. Los presidentes gozarán de una asignación anual de 6000 duros cada uno para gastos de representación.

Madrid 1.º de diciembre de 1852.—El presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo.

PROYECTO DE LEY

SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS.

Artículo 1.º No se podrá allanar la casa de ningún español por la autoridad ó sus delegados sino en los casos y en la forma que determinen las leyes.

Art. 2.º Para entrar en el domicilio de cualquier español se necesita, salvo el caso de flagrante delito, obtener el permiso del dueño, ó en su defecto, que dos vecinos del mismo barrio acompañen al funcionario ó agente de la autoridad.

Lo dispuesto en el presente y anterior artículo no tiene aplicación respecto de los cafés, tabernas, posadas y demás casas públicas.

Art. 3.º A ningún español se podrá separar de su domicilio ó punto de residencia por disposición gubernativa.

Art. 4.º No se le podrá impedir por la autoridad ó sus agentes que resida ó permanezca en cualquier punto del reino, ni que transite por los pueblos que juzgue necesario ó conveniente.

Art. 5.º Tampoco se le podrá negar pasaporte, siempre que lo pida con sujeción a lo que determinen las disposiciones vigentes sobre la materia.

Art. 6.º No están comprendidos en los tres anteriores artículos:

Primero. Los vagos.

Segundo. Los mendigos que estén fuera del pueblo de su naturaleza.

Tercero. Los que estén sujetos a la vigilancia de la autoridad en los casos que determina el código penal.

Art. 7.º No se podrá detener a ningún español sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Cuando la autoridad gubernativa proceda a la detención de alguna persona, deberá entregar al detenido al tribunal competente, en el término de ocho días, contados desde la fecha en que la detención se verificó.

Si la providencia gubernativa se dictare en virtud de autorización especial, se sujetará a lo que en la respectiva ley se prevenga.

Siempre que sea posible, la detención se sufrirá en un local especial y distinto de la cárcel pública.

Art. 8.º Ningún español podrá ser preso sino en los casos y en la forma que prescriban las leyes.

Art. 9.º En cualquier acto de arbitrariedad en los casos enunciatos, la responsabilidad inmediata será del ejecutor del hecho; quedará, sin embargo, exento de ella tan luego como exhiba la orden superior, en virtud de la cual hubiere procedido.

El responsable será definitivamente el funcionario público ó autoridad que hubiere dictado la providencia.

Art. 10. Si la persona responsable fuere una autoridad superior de provincia, conocerá del hecho el tribunal supremo de justicia.

Art. 11. El gobierno, cuando lo exija la conservación del orden ó la seguridad pública en algún punto del territorio español, podrá suspender esta ley, anunciándolo en la *Gaceta* oficial y en los *Boletines* de las provincias donde la suspensión fuere necesaria.

Art. 12. Si la providencia gubernativa se dictare en virtud de autorización especial, se sujetará a lo que en la respectiva ley se prevenga.

Madrid 1.º de diciembre de 1852.—El presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo.

PROYECTO DE LEY

SOBRE LA SEGURIDAD DE LA PROPIEDAD.

Artículo 1.º No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes.

Art. 2.º Ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización.

Madrid 1.º de diciembre de 1852.—El presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo.

PROYECTO DE LEY

DE ORDEN PÚBLICO.

Artículo 1.º Cuando la conservación del orden ó la seguridad pública lo reclamen a juicio del gobierno, se podrá declarar cualquier punto de la monarquía:

Primero. En estado preventivo.

Segundo. En estado excepcional.

Art. 2.º Una y otra declaración corresponden al gobierno, el cual, sin embargo, bajo su responsabilidad, podrá delegar esta facultad a los gobernadores de provincia.

La declaración se hará, ó se aprobará en este último caso, por real decreto, que se habrá de insertar en la *Gaceta* oficial y en el *Boletín* de la provincia donde la declaración se verificó.

El restablecimiento del estado normal se declarará por la misma autoridad y en iguales términos.

Art. 3.º El estado preventivo lleva consigo la suspensión de la ley sobre la seguridad de las personas, en la forma que previene el artículo último de la misma.

Ninguna persona, sin embargo, podrá ser separada de su domicilio para un punto fuera de la provincia donde tenga su residencia.

Art. 4.º Cuando, a juicio del gobierno, el estado preventivo no bastare para lograr cumplidamente el objeto de su declaración, ó cuando lo exija desde luego un suceso imprevisto ó un motivo grave, se declarará aquel punto de la monarquía, sea cual fuere, en estado excepcional.

Art. 5.º Si esta declaración fuere hecha por el gobernador, deberá este funcionario oír previamente a la autoridad militar, la cual consignará su opinión por escrito. Al dar cuenta al gobierno, remitirá siempre el gobernador copia de esta opinión.

Art. 6.º Durante el estado excepcional, la autoridad superior militar, bien del distrito, bien de la provincia, según la necesidad lo exija, reunirá todas las atribuciones gubernativas que fueren necesarias para conservar el orden y la tranquilidad.

La autoridad militar solo podrá acordar gubernativamente la detención y el destierro.

Art. 7.º La autoridad militar publicará un bando en que se determinen los delitos y las penas consignadas a la declaración del estado excepcional; estos delitos serán juzgados por un consejo de guerra ordinario, con sujeción a lo prevenido sobre este punto en la ordenanza del ejército. El consejo de guerra no podrá imponer pena alguna por delito cometido con anterioridad a la publicación del bando.

Art. 8.º Levantado el estado excepcional, se remitirán a los tribunales ordinarios competentes las causas pendientes contra las personas no militares.

Art. 9.º Cesará desde luego los efectos de las disposiciones gubernativas, si fueren de detención: en el caso de destierro, se determinará por el gobierno, y por disposición especial ó general según las circunstancias.

Madrid 1.º de diciembre de 1852.—El presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo.

PROYECTO DE LEY

SOBRE GRANDEZAS Y TÍTULOS DEL REINO.

CAPÍTULO PRIMERO.

De la denominación de los títulos del reino.

Artículo 1.º Los títulos del reino se comprenden en las denominaciones siguientes:

Duques.
Marqueses.
Condes.
Vizcondes.
Barones.

Art. 2.º Al título de duque va precisamente unida la grandeza de España.

Puede unirse al título de conde ó marqués.

Todas las grandezas son de una misma clase.

Art. 3.º El primogénito del título con grandeza se denominará «vizconde». El de conde ó marqués sin grandeza «barón». Unos y otros tomarán la denominación del título que lleve el padre.

CAPÍTULO II.

De la concesión de los títulos y de las cualidades necesarias para obtenerlos.

Art. 4.º El Rey, con audiencia del Consejo Real, otorga merced de título del reino personal, vitalicio ó perpetuo hereditario.

Art. 5.º Para obtener título con grandeza se necesita haber prestado servicios eminentes en cualquiera de las carreras del Estado.

Para el de conde ó marqués sin grandeza, haber prestado servicios notables en cualquiera de dichas carreras, ó hecho en las ciencias ó artes descubrimientos importantes de los cuales, por su naturaleza, no se reporte lucro.

A todo título que cuente mas de 60 años de concesión, y que tenga la renta que se dirá en el párrafo siguiente, podrá unirse la grandeza por gracia especial de S. M.

Para el título hereditario perpetuo con grandeza se necesita tener una renta líquida, al menos, de 400,000 reales.

Para el de conde ó marqués perpetuo hereditario sin grandeza, una renta líquida de 120,000 rs.

La renta podrá alterarse por el Rey, con audiencia del Consejo Real, por disposición general, pero no para un caso especial.

CAPÍTULO III.

Del mayorazgo anejo a los títulos.

Art. 6.º El agraciado con un título perpetuo hereditario tiene obligación de mayorazgar bienes, por lo menos hasta en la cantidad designada, antes de espírarse el real despacho.

Desde esa cantidad podrán mayorazgar los títulos con grandeza hasta dos millones de reales: los títulos sin ella hasta 400,000 rs.

Este máximo no podrá alterarse por el rey, oído el Consejo Real, por disposición general, y no para un caso especial.

Art. 7.º El mayorazgo se ha de constituir en cuanto al mínimo designado para cada título, en fincas rústicas ó urbanas, ó en censos sobre ellas.

En este último caso, el valor de la finca debe ser duplo del capital del censo. Cada uno de los censos no ha de bajar de 2000 rs.

El exceso hasta el máximo fijado podrá consignarse, ó de la manera dicha en el párrafo anterior, ó sobre efectos públicos, derechos ó cualquiera otra especie de renta efectiva.

Art. 8.º Nadie puede constituir mayorazgo sino hasta en la cantidad de que la ley permite disponer por testamento en favor de propios y extraños.

CAPÍTULO IV.

De la sucesión de los títulos.

Art. 9.º La sucesión de los títulos se rige por la de la corona.

Art. 10. Para suceder en el título es necesario acreditar que subsiste el mayorazgo, al menos en la cantidad mínima fijada para los de su clase.

Cuando una misma persona reúna dos ó mas títulos, lo bastará tener mayorazgada la renta mínima fijada para uno de ellos, debiendo ser la de la grandeza en el caso de que uno de los títulos sea de esta clase.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 11. Los actuales poseedores de títulos podrán mayorazgar, aunque sea en menos del mínimo fijado para cada clase en los párrafos cuarto y quinto del art. 5.º

Art. 12. A la cuarta sucesión después de la fecha de esta ley no tendrá derecho el sucesor a usar el título, ni se le espírará el real despacho sin que acredite tener mayorazgada en su mínimo la renta fijada para los de su clase.

Art. 13. A la cuarta generación, contando por primera la de los actuales poseedores de títulos, se ajustará la sucesión de todos a lo dispuesto en el artículo 9.º, cualquiera que sean los llamamientos de la fundación.

Art. 14. Las disposiciones de esta ley no se entienden con las actuales grandezas y títulos, que continuarán usando las denominaciones que hoy tienen.

Art. 15. El gobierno, oído el Consejo Real, dictará las disposiciones legislativas, y hará los reglamentos necesarios para el desenvolvimiento y ejecución de esta ley, y no podrán alterarse sino por los mismos trámites.

Madrid 1.º de diciembre de 1852.—El presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo.

El diario oficial publica ayer la siguiente real orden prohibiendo a la prensa periódica discutir los anteriores proyectos de reforma:

«Es la voluntad de S. M. que no se permita a la prensa periódica discutir los proyectos de reforma publicados por real decreto de este día, a fin de que la vivacidad de las pasiones no perjudique al imparcial estudio que requieren documentos de esta importancia.»

De real orden lo comunico a V. S. para los efectos correspondientes. Madrid 2 de diciembre de 1852.—Bordiu.—Señor gobernador de la provincia de....»

Por real orden inserta en la *Gaceta* de ayer, se han suprimido las cátedras de historia, origen y progresos de los gobiernos representativos, y de elocuencia, del Ateneo de esta corte.

Héla aquí:

Negociado 2.º—Real orden.

«Excmo. Sr.: Ha llegado a noticia del gobierno que en las cátedras de historia, origen y progresos de los gobiernos representativos, y de elocuencia, del Ateneo de Madrid, se han tratado materias políticas estranas al objeto de su institución. En su vista, y considerando que aquel establecimiento está sometido como todos los de su clase a la autorización del gobierno, revocable en todo ó en parte cuando a juicio del mismo no se conforma al objeto para que fué instituido, se ha servido S. M. mandar que se supriman ambas cátedras.»

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes a su cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2 de diciembre de 1852.—Bordiu.—Señor gobernador de esta provincia.»

Dice el *Clamor Público*:

«Ha llegado a Vigo el correo de Ultramar que salió de la Habana el 9 del pasado. Hé aquí como nos lo refiere nuestro correspondiente:

Vigo 28 de noviembre.

«Ha llegado el vapor-correo *Fernando el Católico* hoy por la mañana con diez y nueve días y diez horas de navegación. La fiebre iba calmando despacio.»

El *Times* publica la siguiente carta fechada en Adelaida (Australia del Sud) el 15 de julio último, en que se dan interesantes detalles sobre esta colonia y sobre los buscadores de oro:

«La condición de la colonia, dice la carta, tiene un carácter particular: hace seis meses estaba amenazada de la bancarota por el abandono de las tierras por parte de los propietarios. Hoy circula el dinero, la propiedad vuelve a tomar valor y la población se aumenta. Las tierras se venden a precios mas elevados que antes del pánico. Mas de 700,000 libras esterlinas han venido en menos de cuatro meses a aumentar el valor del capital colonial, sin que el interés haya bajado. El valor del dinero está todavía de 15 a 25 por 100 al año. La mayor parte del capital se encuentra en manos de los hombres de negocios, y se emplea en comprar oro, con lo que se realizan muchos beneficios, en tanto que las riquezas de los nuevos enriquecidos duermen en los bancos ó en los bolsillos de sus poseedores. Hay, pues, pocos valores en circulación afectos ya a empresas particulares, ya a obras de utilidad pública. Los comerciantes solos son los que hacen algunos negocios. Por otra parte, se encuentran muy pocos obreros que emplear. La mayor parte de la población obrera, cuando vuelve a la ciudad de las minas para pasar el invierno, no trabaja; si han reunido algunas libras de oro, las gastan alegremente; si no las tienen, toman prestado con la esperanza de pagarlo en la próxima campaña.

El dinero circula libremente, es cierto, pero en un sentido contrario al que debería naturalmente tener. En lugar de salir de los cofres de las clases mas ricas y entrar por diferentes vías en el bolsillo de los trabajadores, para reparar después en la clase comerciante, sale de las manos de la clase obrera para ir a perderse en las gabetas demasiado llenas del capital. No hay grandes obras públicas ni empresas particulares. No se hace otra cosa que vender y comprar. La clase obrera, lo que se llama pueblo, está siempre en fiestas y en placeres: es el *otium* *sic* dignitate. Los mercaderes, corredores, agentes marítimos, etc., están regularmente ricos.

La cantidad extraordinaria de oro en manos de gentes poco habituadas a tenerlo, es la causa principal de este estado de cosas anormal. Pero el oro remediado por sí mismo los males que ocasiona. Viendo a esta colonia, atraídos por la esperanza de enriquecerse prontamente, un número de emigrantes de la Gran-Bretaña mayor que otras veces, se llegarán a tener obreros a precios moderados.

Esta necesidad se hace sentir en la agricultura, en la industria pecuaria, en el comercio, y aun en las minas, y podría absorber diez veces el superávit de nuestro capital, que después de todo no es muy considerable.

La cantidad de oro depositada en la oficina de ensayo desde el día de su apertura hasta el 19 de este mes inclusivo, es de 133,103 onzas, de un valor en la colonia de 630,000 libras esterlinas (68,000,000 de rs.). Este oro se ha traído casi exclusivamente de las minas de Alejandro en pequeñas cantidades. Es el producto de seis meses de trabajo de cerca de ocho mil personas. No es este, sin embargo, todo el fruto de sus tareas. Sucede mas comunmente que ceden sus pequeños lotes de oro a razón de 65 a 69 chelines la onza a corredores que, por otra parte, hacen adelantos sobre los depósitos hechos en la oficina de ensayo, y que pagan hasta 73 chelines la onza, una vez convertidos en barras marcadas con el sello de la oficina. Las barras quedan depositadas en los sótanos de los bancos, y son representadas en el comercio por los resguardos. La demanda de estos resguardos ha sido tan grande en estos últimos tiempos, que uno de estos bancos (el de la Australia del Sud), se ha visto obligado a emplear dos dependientes auxiliares para ayudar al director a firmarlos y al tenedor de libros a registrarlos. Se han gastado 10,000 rs. en la impresión de estos documentos.

Los mineros no son las personas que ganan mas en extraer el oro del seno de la tierra. Sufren todas las fatigas y las privaciones; arrastran todos los peligros de su penoso oficio de buscador de oro, y sus beneficios no ascienden a mucho mas de sus salarios ordinarios. Los mas afortunados suelen reunir de 8 a 10,000 francos durante los seis meses de trabajo. Estas son raras excepciones. Estas sumas se gastan regularmente en orgías, en extravagancias, y sus dichosos poseedores se encuentran bien pronto sumidos en el mismo estado de antes, y aadenas con detestables hábitos. Lo mejor que pudieran hacer cuando reúnen un pequeño peculio, sería embarcarse para Inglaterra, pero pocos se deciden a ello. Se ve, sin embargo, alguna mejora en la conducta de los trabajadores del campo. Dejan las labores para ir a las minas, y cuando el trabajo de las minas se suspende, vuelven a cultivar la tierra. Así se aseguran amplios beneficios, justa recompensa de su trabajo, y grandes probabilidades de ganancia en esa gran lotería de los buscadores de oro.

Falta todavía a la colonia un servicio regular de vapores con la metrópoli. Se señalan muchos puertos que podrían destinarse ventajosamente para escalas de esta línea. Esto sería para la colonia el mayor beneficio que pudiera recibir de la Inglaterra.

El metal acuñado es muy raro; es lo bastante para detener seriamente el curso de los negocios. La compañía de la Australia del Sud ha creído hasta cierto punto obviar este inconveniente emitiendo billetes de 5 y 10 chelines con promesa de reembolso.

La *South Australian Banking Company* y la *Union Bank of Australia* gran sobre Londres a treinta días vista y a la par, y toman fondos sobre Londres, a treinta días vista y

